

Señores

JUZGADOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS..... (REPARTO)

BUGA – VALLE

DEMANDANTES: DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT Y OTRA

DEMANDADOS: LA NACION - RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA; LA NACION - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC" Y LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

REFERENCIA: DEMANDA DE REPARACION DIRECTA

MOISES AGUDELO AYALA, mayor de edad, abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía 16.361.528 de Tuluá (V), y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 68.337 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando de conformidad con el poder especial, amplio y suficiente que me ha conferido la Señora **DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT** con C.C. No. 38.797.144 de Tuluá(V) actuando en nombre propio y en representación de su menor hija **MELANNY BEDOYA HORTUA** con Registro Civil de nacimiento NUIP 1117023157 de la notaria primera de Tuluá(V), por medio del presente escrito, manifiesto al despacho con todo respeto que presento demanda de **REPARACIÓN DIRECTA** contra: **LA NACION - RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA; LA NACION - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC" Y LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA.**

LAS PERSONAS EN EL PROCESO Y SUS REPRESENTANTES

PARTE DEMANDADA: - LA NACION - RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUDICIAL representada legalmente por la señora Directora nacional **CELINEA OROSTEGUI DE JIMÉNEZ** o a quien haga sus veces; LA NACION - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC" representado en este caso por el Brigadier General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN o quien haga sus veces, LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, Representada por el señor director general de la policía nacional el mayor general **JORGE HERNANDO NIETO ROJAS**, o quien haga sus veces.

PARTE DEMANDANTE: **DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT** con C.C. 38.797.144 de Tuluá (V) quien actúa en nombre propio y como representante de su menor hija **MELANNY BEDOYA** con Registro Civil de nacimiento NUIP 1117023157 de la notaria primera de Tuluá(V), quienes serán representados judicialmente por el suscrito como su apoderado judicial.

APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: MOISES AGUDELO AYALA, mayor de edad, abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía 16.361.528 de Tuluá (V), y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 68.337 del C.S.J.

HECHOS

PRIMERO: El día 13 de octubre de 2015, la Señora **BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO (Q.E.P.D.)**, se encontraba en su casa ubicada en la Carrera 33 N° 41-31 del Barrio Avenida Cali, del municipio de Tuluá (V).

SEGUNDO: El día 13 de Octubre de 2015, siendo aproximadamente las cinco y media de la tarde (5.30 p.m.), el señor **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR** irrumpió de una manera abrupta y repentina a la vivienda de la Señora **BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO (Q.E.P.D.)** donde se encontraba con sus nietos los menores **BRIAN STEIVEN CATAÑO BETANCOURT Y VALENTIN CATAÑO BETANCOURT**, el señor **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR**, portaba en sus manos un arma corto punzante "MACHETE".

TERCERO: El señor **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR** sin razón o motivo alguno arremetió injustificadamente con dicho machete, contra la humanidad de la señora **BLANCA NUBIA BERTANCOURT ZAMBRANO (Q.E.P.D)**, causándole múltiple herida en su cuerpo, ensañándose con la integridad de esta persona vulnerable e indefensa.

CUARTO: Encontrándose estas personas en esta situación tan perversa y deshumanizada que se le estaba causando en su integridad sin motivo alguno, solo le alcanzaban las fuerzas para pedir auxilio, y suplicar por la vida, a lo cual el individuo seguía adelante con su terrible actuar criminal, no importándole el daño que causaba.

QUINTO: Los vecinos y la comunidad que se encontraban por el lugar de los hechos, dieron aviso a las autoridades policiales para que dieran fin al brutal ataque que **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR** propinaba a la humanidad de esta indefensa persona, cuando llegaron las autoridades policiales encontraron la puerta cerrada, suceso que fue realizado por **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR**.

SEXTO: Una vez reducido **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR**, por parte de la autoridad y con ayuda de la comunidad, la escena que fue encontrada no podía ser más dramática, triste y desconsoladora, ya que se observaba el horror causado por un individuo que sin razón arremete contra la integridad unos seres humanos indefensos quienes se encontraban su hogar.

SEPTIMO: Las autoridades policiales encontraron a la Señora **BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO** tendida en el Segundo piso de la vivienda bañada en sangre, con heridas profundas en sus extremidades, quedando evidenciado la lucha que hizo la mujer para proteger y preservar su vida y la de sus seres queridos, en este caso sus nietos; **BETANCOURT ZAMBRANO** batalló con toda su fuerza contra este sujeto infame que arremetió contra ellos, logrando encerrarse en la habitación con su pequeño nieto **VALENTIN CATAÑO BETANCOURT** a quien minutos antes del ataque, ella había puesto en su cuna después de bañarlo, quien no recibió daño alguno gracias al valiente actuar de su abuela.

OCTAVO: **BLANCA NUBIA BERTANCOURT ZAMBRANO (Q.E.P.D)**, fue trasladada en ambulancia a la Clínica San Francisco S.A. para la atención pertinente, debido a la gravedad de las heridas. La señora **BRIGETTE**

CATAÑO BETANCOURT salía de dicha institución de una cita médica, sin aun conocimiento alguno de los hechos ocurridos, se encontró con aquella devastadora escena en la que estaba envuelta su madre.

NOVENO: Se evidencio que la Señora **BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO** llego con extrema gravedad por las lesiones, siendo ya grave la escena en la puerta de urgencias su hija **BRIGETTE CATAÑO BETANCOURT** iba saliendo de pedir una cita, cuando encuentra que el ruido ensordecedor de la ambulancia, traían con ellos a su madre.

DECIMO: Una vez ingresada por urgencias de la clínica San francisco de Tuluá la señora **BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO**, por presentar heridas múltiples con arma cortopusante (Machete) en miembros inferiores, ingresa con palidez mucocutanea marcada, combativa, debido a la gravedad de sus heridas y de manera inmediata es llevada a reanimación, posterior al examen físico se revisan heridas de los miembros inferiores de mayor tamaño en tercio distal de muslo en cara medirla al parecer en recorrido vascular lo cual pudiera explicar hipovolemia del paciente a los 10 minutos la paciente entra en paro cardiorrespiratorio se activa código ritmo de paro asistolia se inicia masaje cardiaco intubación orotraquela al primer intento, paso de adrenalina posterior a 10 min de reanimación, paciente sale de paro se ordenó goteo de dopamina, paquete de emergencia, sedación con midazolam fentanyl, vecuronio se comenta de inmediato con cirujano, quien explora las heridas en quirófano.

DECIMO PRIMERO: La señora **BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO** es llevada a quirófano por cirugía vascular de emergencia en quirófano, encuentran herida vascular en fosa poplítea izquierda, hematoma en trayecto femoro poplíteo, sección de vena poplítea, realizan empaquetamiento de muslo izquierdo con 1 compresa y 2 apósitos, se realiza politransfusión masiva intra operatoria con 8 UD de glóbulos rojos, 11 UD de plasma fresco, 1 UD de crioprecipitado y 2 pool de plaquetas, se adiciona 1 GR de ácido tranexámico por coagulopatía y se administran 2 AMP de gluconato de calcio, se pasa eco dirigido catéter venoso central subclavio y línea arterial. La señora **BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO**, persiste con hipotermia a pesar de manta térmica, choque refractario, acidemia metabólica severa, con infusión de bicarbonato

sódico, anurica a pesar de furosemda en infusión, de forma súbita presenta ritmo fibrilación ventricular, se realizan maniobras de RCCP avanzadas por 40 minutos, paciente con pupilas dilatadas, no reactivas, ritmo asistolia.

DECIMO SEGUNDO: La señora **BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO**, es Ingresada el día 14 de octubre de 2015 a la Unidad de cuidados Intensivos (UCI) en el POP inmediato con infusión de noradrenalina y sedación, estado crítico con un diagnóstico de choque hipovolémico, traumatismo de la vena poplítea.

DECIMO TERCERO: La señora **BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO**, pese a todos los esfuerzos médicos fallece el día 15 de Octubre de 2015 a las 3:00 A.M., por falla multiorganica cerebral, pulmonar, renal, coagulopática, hepática, metabólica, tisular, a pesar de manejo intensivo, soporte vasopresor altas dosis, VM parámetros altos transfusión masiva de glóbulos rojos, plasmas y plaquetas.

DECIMO CUARTO: Como consecuencia de esta atroz situación en que se vio Inmersa esta familia, por el daño moral, físico, espiritual, psicológico que sufren sus miembros **DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT**, y **MELANNY BEDOYA HORTUA**, son controlados con profesionales con psicólogos, médicos etc.

DECIMO QUINTO: Una vez narrados los anteriores hechos y revisados los antecedentes del señor **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR** se encontró que se trata de un individuo que estaba purgando una condena y gozaba de prisión domiciliaria. Para mayor claridad de este hecho me permito ilustrar al Despacho así: Se observa entonces que mediante Auto Interlocutorio N° 1531 del 15 de Septiembre de 2015, el Juzgado SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS DE POPAYAN CAUCA, donde el Señor **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR** purgaba una pena por el Delito de HOMICIDIO AGRAVADO FRABRICACION, TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES hechos que tuvieron lugar en la localidad de Sevilla Valle y quien fuera condenado mediante sentencia de agosto 17 de 2010 a la pena de 12 años -2 meses -7 días y 12 horas de prisión. **RESUELVE:**

"PRIMERO: RECONOCER que el Señor JHON WILMER VALLEJO SALAZAR ha descontado a la fecha un total de 7 años -6 meses -9.5 días de prisión.. SEGUNDO: CONCEDER la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión consagrada en el artículo 38 G del CP al interno JHON WILMER VALLEJO SALAZAR , la cual disfrutara en la carrera 27 N° 39-24 del Barrio Avenida Cali- Valle, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído , la cual se acompañara de un mecanismo de vigilancia electrónica...."

DECIMO SEXTO: De lo narrado en el hecho anterior, se evidencia que se trata de un individuo peligroso, que estaba al cuidado y responsabilidad del estado, puesto que esta salió de establecimiento carcelario a purgar prisión domiciliaria, y que por este solo hecho estaba al cuidado del estado, en este caso del INPEC y del Juzgado de ejecución de penas, como de la policía Nacional. Al otorgarse este beneficio también se evidencia negligencia por parte del Juzgado que determino la solicitud de prisión domiciliaria, debido a que esta tenía el deber de garantizar a la comunidad que, un individuo con los antecedentes del Señor **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR**, no incurriera en los mismo hechos o más graves aun, y al cual debían someter a un estudio minucioso si era apto o no para gozar de un beneficio de prisión domiciliaria, o aún más grave si su comportamiento iba más allá y debía ser tratado en un centro especializado de enfermos mentales, y no ser puesto sin ninguna garantía en la sociedad, para que su actuar fuera de todo contexto afectara como lo fue en este caso contra la humanidad de **BLANCA NUBIA BERTANCOURT ZAMBRANO (Q.E.P.D)**.

DECIMO SEPTIMO: Ahora si bien es cierto nos encontramos ante el episodio en el que Señor **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR** comete un hecho despiadado, contra la humanidad de una persona indefensa, es de resaltar sin duda que al momento de la ocurrencia de estos hechos, el señor **VALLEJO SALAZAR** debía estar bajo la vigilancia de INPEC, entidad designada, para vigilar el cumplimiento de la pena en el lugar indicado en

el interlocutorio 1531 de 2015, esto en la carrera 27 No 39 24 Barrio Avenida Cali de Tuluá Valle.

DECIMO OCTAVO: El señor **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR**, fue enviado a su casa ubicada en la carrera 27 no 39 24 a terminar de pagar su condena, hasta que llegara el día de expiración. Teniendo en cuenta que fue condenado a 12 años 2 meses siete días 12 horas y que al 15 de septiembre de 2015, momento en que se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria llevaba 7 años 6 meses 9.5 días, y al momento de cometer el delito de marrar, 13 de octubre de 2015, llevaría 7 años 5 meses 27 días, la condena expiraría en el año 2020, es decir al momento de la comisión del nuevo delito, su condena estaba vigente.

DECIMO NOVENO: Según documento suscrito por funcionarios del INPEC, basados en concepto de médico psiquiatra y según la historia clínica, el señor **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR**, según su diagnóstico de IDX esquizofrenia paranoide no le era recomendable la casa por cárcel, como consta en el oficio 81001-GASUP-103, que hace parte de esa demanda, emitido por el INPEC. Sin embargo se dio caso omiso a este oficio y al señor **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR**, se le concedió el beneficio de casa por cárcel. Dicho beneficio permitió que sucedieran los hechos anteriormente narrados.

VIGÉSIMO: Para purgar esta condena el señor **JHON WILMER VALLEJO**, debía cumplir con unas condiciones de seguridad, las mismas que establece el artículo 38B de la ley 599 del año 2000, numeral 4 literal d, además de la establecida en la misma sentencia, la cual estableció: Para el cumplimiento efectivo de esta medida, se ordena que la misma se acompañe de un mecanismo de vigilancia electrónica, el cual será suministrado por el INPEC,.... En caso de no haber disponibilidad material del brazalete, el INPEC informara lo pertinente, no obstante, hará efectivo el beneficio, ejerciendo la vigilancia de rigor.". Vigilancia esta de rigor que nunca se cumplió, pues no hubiera ocurrido la presente tragedia.

VIGÉSIMO PRIMERO: La señora BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO, había nacido el día 26 de noviembre de 1957 y al momento de su fallecimiento tenía 57 años de edad.

VIGÉSIMO SEGUNDO: He considerado que los perjuicios tienen un valor discriminado en la forma siguiente:

POR EL FALLECIMIENTO DE BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO

PERJUCIOS MORALES

DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT\$73.771.700,00
MELANNY BEDOYA HORTUA\$73.771.700,00

PERJUICIO A LA VIDA DE RELACION

DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT\$140.000.000,00

Estimación razonada de la cuantía **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS \$287'543.400,00**

En sentencia que constituya cosa juzgada, solicito al Despacho, que se hagan las siguientes o similares:

DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERA: LA NACIÓN COLOMBIANA - RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUDICIAL representada legalmente por la Directora nacional la **Dra. CELINEA OROSTEGUI DE JIMÉNEZ** o a quien haga sus veces, **LA NACION - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"** representado en este caso por el Brigadier General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN, o a quien haga sus veces y **LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA**, representado en este caso por su director general de la policía nacional el mayor general **JORGE HERNANDO NIETO ROJAS**, o quien haga sus veces, son responsables administrativamente por los perjuicios patrimoniales y



extrapatrimoniales o inmateriales causados como consecuencia de la muerte de la señora **BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO** a: **DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT**, hija de BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO y madre de la menor **MELANNY BEDOYA HORTUA** nieta de BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO, por los perjuicios sufridos contra la humanidad y posterior de muerte de BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO, perjuicios que fueron ocasionados por parte del Señor **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR**.

SEGUNDA. Condenar, en consecuencia de la anterior declaración a **LA NACIÓN COLOMBIANA - RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUDICIAL** representada legalmente por la Directora nacional la **Dra. CELINEA OROSTEGUI DE JIMÉNEZ** o a quien haga sus veces; **LA NACION -INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"** representado en este caso por el Brigadier General **JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN**, o a quien haga sus veces, y a **LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA**, representada por el señor director general de la policía nacional el mayor general **JORGE HERNANDO NIETO ROJAS** o quien haga sus veces, a pagar a mis procurados: la señora **DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT**, y a la menor **MELANNY BEDOYA HORTUA**, el valor de la indemnización que le corresponde por los perjuicios y daños ocasionados de conformidad con lo establecido en nuestra **normatividad civil**, perjuicios tanto de orden patrimonial extrapatrimonial o inmateriales, así:

POR EL FALLECIMIENTO DE BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO

- DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT

Perjuicios extra patrimoniales		
Daño	Daño a la vida de	Total

moral	relación	
\$73.771.700	140'000.000.00	\$213.771.700

- MELANNY BEDOYA HORTUA

Perjuicios extra patrimoniales		
Daño moral	Daño a la vida de relación	Total
\$73.771.700	-0-	\$73.771.700

TERCERA: La condena respectiva será indexada, actualizada de conformidad con lo previsto en el art. 187 inciso final del **C.P.A.C.A.** (Ley 1437 de 2011), aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo y su pago efectivo por la entidad condenada y de conformidad con las fórmulas que para el efecto ha establecido o establezca el Honorable Consejo de Estado.

CUARTA: Se condene en costas, agencias en derecho a la parte convocadas conforme al art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

Las anteriores declaraciones y condenas están fundamentadas en los siguientes:

**FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES
DAÑO ANTIJURÍDICO COMO FUNDAMENTO DE LA
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO**

La **Constitución Nacional** prevé en el **art. 90** que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las autoridades

públicas. En este caso - la responsabilidad patrimonial del Estado, por **"falla del servicio"** permite ahora a mi poderdante, acudir ante la justicia contenciosa administrativa para que a través del Medio de Control Judicial y Demanda de Reparación Directa, reclame del Estado, el pago de las sumas de dinero que se le deberán liquidar a su favor, como indemnización de perjuicios por la falla del servicio derivada en la omisión por parte de los funcionarios de la administración de justicia, como de la policía nacional y del INPEC, quienes debían velar porque el señor JHON WILMER VALLEJO, cumpliera adecuadamente la pena, sin poner el riesgo la vida, la seguridad y tranquilidad del conglomerado humano.

Como lo consagra el art. 140 de la ley 1437 de 2011: "En los términos del art. 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado" (...).

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que le sean imputables. En consecuencia, es necesario dilucidar en cada caso concreto si se configuran los elementos previstos en esta norma para que nazca el deber del Estado de responder, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al demandado.

- **LA NACION- RAMA JUDICIAL- DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA;** es responsable por que el Juez es el que determina si un individuo es apto para la prisión domiciliaria en este caso el señor **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR**, puesto que otorgó tal beneficio a una persona para la cual la ley no lo autoriza; además de que previamente conocía de que se trataba de un individuo que, según su historia clínica y oficio suscrito por funcionarios del INPEC, sufría de serias perturbaciones mentales.
- **LA NACION- EL INSTITUTO NACIONAL, CARCELARIO "INPEC" y LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA,** son responsables por ser las entidades encargadas de la vigilancia y el cumplimiento de la condena que en este caso era en el domicilio del señor **JHON WILMER VALLEJO SALAZAR**, además de que previamente conocía de que se trataba de un individuo

que, según su historia clínica y oficio suscrito por funcionarios del INPEC, sufría de serias perturbaciones mentales.

. Apoyo estos argumentos en las siguientes normas:

La ley 1453 de 2011, artículo 1°. Vigilancia de la detención domiciliaria. El inciso **2°** del artículo 38 de la Ley 599 de 2000 quedará así:

El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por la autoridad judicial que conozca del asunto o vigile la ejecución de la sentencia, con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, organismo que adoptará mecanismos de vigilancia electrónica o de visitas periódicas a la residencia del penado, según su competencia legal, entre otros, y que serán indicados por la autoridad judicial, para verificar el cumplimiento de la pena, de lo cual informará al despacho judicial respectivo.

Artículo 2°. Sistema de información sobre la prisión domiciliaria. El artículo 38 de la Ley 599 de 2000 tendrá un **parágrafo**, el cual quedará así:

Parágrafo. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, suministrará la información de las personas cobijadas con esta medida a la Policía Nacional, mediante un sistema único de Información de conformidad con los parámetros que para tal efecto establezca el Ministerio del Interior y de Justicia en coordinación con estas entidades, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de esta ley.

Artículo 3°. Vigilancia Electrónica. El artículo **38 A** de la Ley 599 de 2000 quedará así:

Artículo 38 A. Sistemas de vigilancia electrónica como sustitutivos de la prisión. El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad podrá ordenar la utilización de sistemas de vigilancia electrónica durante la ejecución de la pena, como sustitutivos de la prisión, siempre que concurren los siguientes presupuestos:

1. Que la pena impuesta en la sentencia no supere los ocho (8) años de prisión.
2. Que la pena impuesta no sea por delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional Humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de menores de edad, uso de menores de edad para la comisión de delitos, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas,

financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada, administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones o explosivos y delitos contra la administración pública, salvo delitos culposos.

3. Que la persona no haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.

4. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del condenado permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.

5. Que se realice o asegure el pago de la multa mediante garantía personal, prendaria, bancaria o mediante acuerdo, salvo cuando se demuestre que está en incapacidad material de hacerlo teniendo en cuenta sus recursos económicos y obligaciones familiares.

6. Que sean reparados los daños ocasionados con el delito dentro del término que fije el Juez o se asegure su pago mediante garantía personal, prendaria, bancaria o mediante acuerdo, salvo cuando se demuestre que está en incapacidad material de hacerlo teniendo en cuenta sus recursos económicos y obligaciones familiares.

7. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones, las cuales deberán constar en un acta de compromiso:

a) Observar buena conducta;

b) No incurrir en delito o contravención mientras dure la ejecución de la pena;

c) Cumplir con las restricciones a la libertad de locomoción que implique la medida;

d) Comparecer ante quien vigile el cumplimiento de la ejecución de la pena cuando fuere requerido para ello.

El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el acta de compromiso dará lugar a la revocatoria de la medida sustitutiva por parte del Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

8. Que el condenado no se haya beneficiado, en una anterior oportunidad, de la medida sustitutiva de pena privativa de la libertad.

La **LEY 1709 DE 2014**, en su artículo 31, dispuso: Adicionase un artículo a la Ley 65 de 1993 el cual quedará así:

Artículo 29F. Revocatoria de la detención y prisión domiciliaria. El incumplimiento de las obligaciones impuestas dará lugar a la revocatoria mediante decisión motivada del juez competente.

El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encargado del control de la medida o el funcionario de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, detendrá inmediatamente a la persona que está violando sus obligaciones y la pondrá en el término de treinta y seis horas (36) a disposición del juez que profirió la respectiva medida para que tome la decisión correspondiente.

La revocatoria de la medida se dispondrá con independencia de la correspondiente investigación por el delito de fuga de presos, si fuere procedente.

Parágrafo. El INPEC podrá celebrar convenios con la Policía Nacional para el seguimiento del cumplimiento de la prisión domiciliaria cuando la guardia no sea suficiente para garantizar el desarrollo de la misma. La participación de la Policía Nacional dependerá de la capacidad operativa y logística de las unidades que presten el apoyo al INPEC”.

DETENCION O PRISION DOMICILIARIA

La prisión domiciliaria es un mecanismo a través del cual se cambia el lugar de la privación de la libertad de quien ha sido condenado: de un establecimiento penitenciario, se pasa a cumplir la pena privativa en el domicilio. Si bien no concede completamente la libertad de locomoción, sí permite un grado más amplio que el que puede haber en un establecimiento penitenciario. En otras palabras, se trata de un mecanismo que permite el cumplimiento de la pena privativa de la libertad extra muros. La prisión domiciliaria como mecanismo sustitutivo de la prisión se encuentra regulada en el artículo 38 del Código Penal, Ley 599 de 2000, donde se señala:

Artículo 38. Modificado por la Ley 1709 de 2014, artículo 22. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión consistirá en la privación de la libertad en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el Juez determine. El sustituto podrá ser solicitado por el condenado independientemente de que se encuentre con orden de captura o privado de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido voluntariamente la acción de la justicia.

Parágrafo. La detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. En estos casos se aplicará el mismo régimen previsto para este mecanismo sustitutivo de la prisión.

Requisitos y causales de exclusión De acuerdo con el artículo 38 B del Código Penal, se debe tener en cuenta que:

- La prisión domiciliaria se concede sólo para los delitos que, de acuerdo con el Código Penal, tienen establecida una pena mínima de ocho años o menos. Así, por ejemplo, el secuestro simple tiene una pena entre dieciséis y treinta años, de acuerdo con el artículo 168 del Código Penal, Ley 599 de 2000; en el caso de este delito no es posible conceder la prisión domiciliaria
- No puede concederse si quien fue condenado cometió alguno de los delitos señalados en el inciso segundo del artículo 68-A del Código Penal.
- Es preciso demostrar que el condenado tiene arraigo social y familiar.
- Hay que garantizar mediante caución que:
- No se cambiará de residencia sin antes tener una autorización judicial.
- Serán reparados los daños ocasionados por el delito, de acuerdo con el plazo fijado por el juez.
- El literal B del numeral 4 del artículo 38-B del Código penal establece además que esta reparación ha de asegurarse por medio de un acuerdo con la víctima, o a través de una garantía personal, real o bancaria, salvo que se demuestre insolvencia.
- Es necesario cumplir las condiciones de seguridad que impone el juez en su sentencia, además de las condiciones establecidas en los reglamentos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para ello.
- Hay que comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.
- Cuando sea autorizado el mecanismo, se debe permitir la entrada de los funcionarios encargados de la vigilancia del cumplimiento de las condiciones de la prisión.

Situación de libertad originada en un permiso concedido por autoridad administrativa: Un examen independiente requiere la pregunta por la constitucionalidad de la norma acusada, en aquellos casos en que la situación de libertad se origina en un permiso concedido por la autoridad administrativa -INPEC-, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley (Código Penitenciario arts. 147 y ss.). En esos casos, para empezar, si el juez considera razonablemente que existe alguna causa para revocar el

permiso, puede hacerlo con sujeción a la ley, lo cual está dentro del marco constitucional (CP art 28). Asimismo, la propia Ley 65 de 1993 contempla la posibilidad de que, ante el incumplimiento de las condiciones específicas que se le hayan impuesto al beneficiario, se revoque el permiso por quien lo otorgó (Código Penitenciario art. 150). Por tanto, es posible que la misma autoridad administrativa que la concedió, resuelva la autorización ante el desacato objetivo de lo contenido en ella. Más allá de lo cual, si fuera de esas condiciones se observa el incumplimiento de otras obligaciones debidamente impuestas en providencia judicial, y derivadas del régimen de detención o prisión domiciliaria, forma parte de la potestad que les reconoce la norma acusada a los funcionarios pertinentes del INPEC y de la Policía Nacional, ejecutar efectivamente la medida de aseguramiento y la pena de reclusión domiciliaria, si las condiciones para concederlas se están trasgrediendo. En tal caso, el fundamento sería entonces también una decisión judicial, y por ende no habría vulneración de la reserva judicial (CP art 28).

Control electrónico: es un sistema, a través del cual se instala un dispositivo consistente en un brazalete o tobillera en el cuerpo del condenado o sindicado, el cual llevará incorporada una unidad transmisora, generando la ubicación del condenado o del sindicado, indicando si está o no en el sitio y horario fijado por la autoridad judicial.

Pasivo RF: Se utiliza en personas que cuentan con el beneficio de detención o prisión domiciliaria y no tienen autorización para salir de la vivienda a realizar otras actividades.

Detención: privación provisional de la libertad, ordenada por una autoridad competente, salvo en caso de delito flagrante.

PRISION DOMICILIARIA Y VIGILANCIA ELECTRONICA

-Identificación de dos grupos de condenados

La Corte identificó dos grupos de condenados: (i) aquellos que cumplen con los requisitos para acceder a la prisión domiciliaria, y a quienes

eventualmente, por decisión del INPEC, se les puede someter a vigilancia electrónica como forma de control de cumplimiento de la pena en la modalidad de casa por cárcel. Y (ii) aquellos que no cumplen con los requisitos para la prisión domiciliaria pero sí con los exigidos para la vigilancia electrónica.

INSTITUCION ENCARGADA DE LA VIGILANCIA

El Sistema de Vigilancia Electrónica pretende ayudar a la verificación del cumplimiento de la pena de prisión domiciliaria, como quedó establecido en la reciente reforma impulsada por la Ley 1709 de 2014, la autoridad competente para adoptarlo es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). De esta manera, cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) impone como medida administrativa de control del cumplimiento de la prisión domiciliaria, el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ya ha analizado previamente el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la prisión domiciliaria (Sentencia C-185 de 2011, expediente D-8198 Corte Constitucional).

EJECUCION DE MEDIDAS Y PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD- Facultad de capturar asignada al INPEC y a la Policía Nacional

La ley puede en consecuencia asignarle al INPEC, y a la Policía Nacional en cuanto resulte compatible con sus funciones constitucionales, la atribución de efectuar actos, incluso coactivos como la captura, que contribuyan a la ejecución de las medidas y penas privativas de la libertad debidamente decretadas por juez competente, en cuanto esto no suponga alterar o modificar definitivamente las condiciones de la detención o de la pena. En ese margen se ubica la responsabilidad encomendada, toda vez que les adjudica a los funcionarios del INPEC o de la Policía Nacional, encargados de controlar y vigilar las detenciones y prisiones domiciliarias, la función de ejecutar las resoluciones judiciales que hayan impuesto la medida de aseguramiento o la pena privativa de la libertad, por la vía de una captura

transitoria que se fundamenta en decisión judicial, y que no altera definitivamente las condiciones de la medida o la pena.

RESERVA JUDICIAL EN MATERIA DE DETENCION Y PRISION DOMICILIARIA-Sustento en el principio de separación de funciones

No puede perderse de vista que la reserva judicial en esta materia tiene un sustento en el principio de separación de funciones (CP art 113). En efecto, la Constitución establece en primer término que el legislador es quien debe definir previamente en abstracto los motivos y el procedimiento indicado para privar a una persona de su libertad (CP arts. 28, 29 y 150 num 1 y 2). En segundo lugar, consagra una reserva judicial, como regla general, para juzgar cuándo se dan las hipótesis que ha previsto la ley a fin de llevar a cabo la medida de privación de la libertad que allí se consagra (CP arts. 28, 29, 32 y 250). Finalmente, instaaura una rama ejecutiva, cuyo Jefe y Suprema Autoridad Administrativa es el Presidente de la República, de la cual forman parte la Policía Nacional (CP arts. 188 num 3, 216 y 218) y el INPEC (C Penitenciario art 15), entre cuyos deberes se encuentran los de obedecer las leyes y velar por su estricto cumplimiento y, específicamente, de acuerdo con la ley, ejecutar las penas y medidas Impuestas debidamente por autoridad judicial competente. Esto permite advertir que la facultad prevista en la norma acusada no viola tampoco el fundamento de la reserva judicial, pues la separación de funciones queda Intacta, en la medida en que al funcionario pertinente del INPEC y de la Policía Nacional no se les da otra atribución que la de ejecutar las decisiones judiciales que inicialmente imponen la detención o pena de prisión domiciliarias.

La disposición cuestionada se refiere a una facultad administrativa que puede recaer sobre las personas sujetas detención o prisión domiciliarias. Los titulares de la potestad que allí concede el legislador son, de un lado, el "funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) encargado del control de la medida" o el "funcionario de la Policía Nacional en el ejercicio de las funciones de vigilancia". Como se ve, el precepto no

le atribuye indiscriminada esa función a cualquier funcionario del INPEC o de la Policía Nacional, sino puntualmente a los que tengan a su cargo el control y la vigilancia concreta de una medida individual de detención o de pena de prisión domiciliarias. En este contexto conviene destacar que, en tratándose de la detención domiciliaria, el control le corresponde al INPEC (CPP art 314). En cambio, en cuanto se refiere a las penas de prisión domiciliarias, el control es ejercido por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) presta a este respecto una función de "apoyo" (C Penal art 38C). Asimismo, con el fin de contar con medios adicionales de control, el Código Penal dice que el INPEC "suministrará la información de las personas cobijadas con esta medida a la Policía Nacional, mediante el sistema de información que se acuerde entre estas entidades" (idem). Igualmente, en orden a definir cuáles servidores de la Policía están facultados en virtud de esta disposición, debe tenerse en cuenta el parágrafo del artículo 29F, reformado: (Parágrafo del último inciso del artículo 28 de la ley 65 de 1993.) – art 31 ley 1709 de 2014.

"El INPEC podrá celebrar convenios con la Policía Nacional para el seguimiento del cumplimiento de la prisión domiciliaria cuando la guardia no sea suficiente para garantizar el desarrollo de la misma. La participación de la Policía Nacional dependerá de la capacidad operativa y logística de las unidades que presten apoyo al INPEC".

Existen tres (3) mecanismos básicos para hacer efectivo el mecanismo de la vigilancia electrónica:

1. En el seguimiento pasivo RF se instala un dispositivo consistente en un brazalete o una tobillera en el cuerpo del condenado, sindicado, imputado o acusado, el cual transmite a una unidad receptora, la que a su vez se encuentra conectada a una línea telefónica convencional.

2. En el seguimiento activo – GPS se instala un dispositivo consistente en un brazalete o tobillera en el cuerpo del sindicado, imputado o acusado, el cual llevará incorporada una unidad GPS (Sistema de posicionamiento global), que transmite la ubicación del beneficiario, indicando si ha llegado a zonas de exclusión. La norma establece que cuando el beneficiario del dispositivo llegue al lugar establecido para el cumplimiento de la medida de aseguramiento, la información que así lo indique será transmitida al centro de monitoreo vía telefónica o móvil, sin que durante el transcurso del día se haya perdido la transmisión inherente al sistema de vigilancia electrónica.

3. El reconocimiento de voz se lleva a cabo con una llamada al lugar de residencia del condenado o sindicado, y se autentica su identidad comparando su voz contra una impresión de voz previa tomada durante el proceso de registro.

No obstante a la violación de las anteriores normas, por parte de las entidades demandadas, también se incurrió en la violación de las siguientes:

LEY 1709 DE 2014

Artículo 24. Establecimientos de reclusión para inimputables por trastorno mental permanente o transitorio con base patológica y personas con trastorno mental sobreveniente. *Estos establecimientos están destinados a alojar y rehabilitar a inimputables por trastorno mental, según decisión del juez de conocimiento previo dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a aquellas personas a quienes se les sustituye la pena privativa de la libertad por internamiento en este tipo de establecimientos como consecuencia de un trastorno mental sobreveniente. En ningún caso este tipo de establecimiento podrá estar situado dentro de las cárceles o penitenciarías.*

Estos establecimientos tienen carácter asistencial, deben especializarse en tratamiento psiquiátrico, rehabilitación mental con miras a la inclusión familiar, social y laboral.



La custodia y vigilancia externa de estos establecimientos estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y la construcción de los mismos estará a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. En todo caso, contarán con personal especializado en salud mental en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del presente Código y con estricto cumplimiento de los estándares de calidad que para tal efecto determine el Ministerio de Salud y Protección Social en reglamentación que expida para tal efecto dentro del año siguiente a la expedición de la presente ley.

Parágrafo. *En los casos en los que el trastorno mental sea sobreviniente y no sea compatible con la privación de la libertad en un centro penitenciario y carcelario, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, o el juez de garantías si se trata de una persona procesada, previo dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, otorgarán la libertad condicional o la detención hospitalaria para someterse a tratamiento psiquiátrico en un establecimiento destinado para inimputables y con las condiciones de seguridad de tales establecimientos, en el marco del régimen especial que aplique para el sistema de salud de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.*

Una vez se verifique mediante dictamen del Instituto de Medicina Legal que ha cesado el trastorno, la persona retornará al establecimiento de origen.

Parágrafo transitorio. *Los anexos o pabellones psiquiátricos existentes serán reemplazados de manera gradual por los establecimientos de que trata el presente artículo, una vez estos sean construidos y puestos en funcionamiento.*

Artículo 68. *Modifícase el artículo [107](#) de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:*

Artículo 107. Casos de enajenación mental. *Si una persona privada de la libertad es diagnosticada como enferma mental transitoria o permanente, de acuerdo con el concepto dado por el médico legista, se tomarán todas las medidas pertinentes para la protección de su vida e integridad física y se ordenará su traslado a los establecimientos especiales de conformidad con lo que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.*

De otra parte, teniendo en cuenta que, de antemano a otorgarse la prisión domiciliaria, se conocía por parte de las autoridades del INPEC, como por parte del Juzgado de Ejecución de Penas, estos conocían de los problemas psiquiátricos que padecían el señor JHON WILMER VALLEJO, era apenas natural la previsibilidad del riesgo, al que se sometía a la comunidad del entorno en donde este purgaría su prisión domiciliaria como a la postre ocurrió para las víctimas familiares de mis procurados.

De las normas anteriores se puede colegir con meridiana claridad la responsabilidad que tienen los funcionarios de la rama Judicial como del INPEC, y de la policía nacional para procurar el cumplimiento de la pena por parte de los internos o de quienes cumplen prisión domiciliaria.

Esta normatividad analizada a luz de los hechos, demuestran que las entidades demandadas no cumplieron adecuadamente con sus deberes, y dicha omisión conllevó al daño que, a mi procurado, le ocasionó el condenado JHON WILMER VALLEJO, daño este que no estaba mi procurado a soportar, y que de acuerdo a la doctrina, el derecho positivo y la jurisprudencia El estado (policía nacional; el INPEC; Rama Judicial) están obligados a reparar el daño hecho a mis procurados. así:

Para **DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT** y **MELANNY BEDOYA HORTUA** la pérdida de un ser querido y en las condiciones en que ocurrieron los hechos fue muy traumático, ocasionado daños psicológicos que son difíciles de superar como es:

AFLICCIÓN, DUELO Y PÉRDIDA DE UN SER QUERIDO

Cuando alguien experimenta la pérdida de un ser querido o alguien importante en su vida, la persona atraviesa por un proceso normal llamado aflicción. La aflicción es algo natural y esperado; con el transcurso del tiempo, puede ayudar a que a la gente acepte y comprenda su pérdida.



El duelo es parte de lo que una persona experimenta con la muerte de un ser querido. Es el estado de dolor tras la pérdida. Se dice que la persona que ha perdido a alguien está en duelo.

El luto es la manifestación externa de la pérdida y la aflicción. Este luto incluye conductas y rituales que son específicos a la cultura, personalidad y religión de cada persona. El duelo y el luto forman parte del proceso de aflicción.

La aflicción implica la sensación de muchas emociones diferentes a través del tiempo, lo que eventualmente ayudará a que la persona acepte la pérdida de un ser querido. Pero hay que tener en cuenta que la aflicción no es igual para todos, y cada pérdida es diferente.

COMPETENCIA

Por la naturaleza del proceso, por el domicilio de las partes y por la cuantía, es Usted Señor Juez, competente para conocer de esta Litis.

CUANTIA

La cuantía del proceso la estimo provisionalmente en Estimación razonada de la cuantía **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS \$287.543.400,00**

Estimación Razonada de la Cuantía:

A) Indemnización causada:

2. POR PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES – INMATERIALES

2.1. PERJUCIOS MORALES



Por concepto de Perjuicios Morales teniendo en cuenta la aflicción interna que sufrió al verse privado injustamente de su libertad sin ningún soporte jurídico válido. **EN CIEN SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. \$73.771.700,00 M/C**, (para cada uno) actualizados al día del pago, de conformidad con lo previsto en el art. 187 del C.C.A., mediante los mecanismos, fórmulas y procedimientos adoptados por el Consejo de Estado, o el mayor valor que se fije por los lineamientos del Consejo de Estado, esto hechos narrados que atentaron contra la humanidad de **BLANCA NUBIA BERTANCOURT**, no solo por las heridas sufridas y la muerte de la señora **BLANCA NUBIA**, en daño psicológico que sufrió esta familia.

DIANA LORENA HORTUA BETANCOUT.....\$73.771.700,00
DIANA LORENA HORTUA BETANCOUT\$73.771.700,00

Total daño moral..... \$147.543.400,00 M/C.

DAÑO A LA VIDA DE RELACION

DIANA LORENA HORTUA. \$140.000.000,00

Total **perjuicios** **extrapatrimoniales**
inmateriales.....**\$287.543.400,00 M/C.**

DAÑO A LA VIDA DE RELACION

En qué consiste el denominado perjuicio fisiológico o de la vida de relación Desde hace varios años la doctrina y la jurisprudencia producida por los diferentes países ha venido aceptando la indemnización a causa de lo que nosotros llamamos "perjuicio fisiológico" y que ellos llaman "perjuicio a la vida de relación o alteraciones de las condiciones de existencia". Sin embargo, en ninguno se ha legislado positivamente acerca de este tipo de lesión, siendo que lo más que se ha llegado a hacer es por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa, el que ha propuesto a los países integrantes de esa comunidad la introducción en los ordenamientos respectivos de reglas jurídicas al respecto.



A pesar de la aceptación citada, aún no hay unanimidad al respecto y por ejemplo, en Francia se afirma que las alteraciones en las condiciones de existencia no generan doble indemnización con el perjuicio moral y son, entonces, en el derecho francés, rubros del perjuicio que no 4. Tamayo Jaramillo, Javier. De la responsabilidad civil. De los perjuicios y su indemnización. Tomo IV. Bogotá: Editorial Temis, 1999, pág. 145. 5. Martínez Rave, Gilberto. Responsabilidad civil extracontractual en Colombia. Medellín: Biblioteca Jurídica Diké, 1996, pág. 237. 115 El perjuicio a la vida de relación... son sinónimos ni expresan el mismo daño⁶. En Italia, en torno al perjuicio fisiológico, la jurisprudencia considera que tal perjuicio es de tipo patrimonial, pero en el fondo acepta que su indemnización es procedente aunque no haya merma económica real⁷. Particularmente, en la legislación colombiana no existe norma alguna que consagre la indemnización del perjuicio fisiológico o perjuicio a la vida de relación. Sin embargo, los artículos 2341 y 2356 del Código Civil establecen la obligación de indemnizar todos los daños que sean causados dolosa o culposamente, lo que vendría a constituirse en la causa legal del deber de resarcirlos a quien resulte responsable de causar un perjuicio fisiológico o a la vida de relación de una persona. En cuanto se refiere a la doctrina, las obras de más reciente aparición son unánimes en considerar que este tipo de perjuicios debe ser indemnizado y debe tenerse como rubro diferente de los perjuicios materiales y de los morales. Tamayo Jaramillo indica que "la indemnización del perjuicio fisiológico repara la supresión de actividades vitales"⁸ y Martínez Ravé es partidario de "una concepción amplia de los perjuicios fisiológicos", por lo que afirma "que deben ser indemnizados independientemente de los perjuicios materiales y de los morales"⁹. Jurisprudencialmente, en cambio, la situación no ha sido pacífica. En Francia, por ejemplo, aunque las alteraciones en las condiciones de existencia se separan del perjuicio moral, no son independientes de las consecuencias de orden económico que genera el hecho dañino. Sin embargo, en la misma jurisprudencia francesa, estos daños se han considerado por fuera del perjuicio material y, en ocasiones, el juez ha apreciado también sus elementos económicos, es decir, que en la práctica no se distingue exactamente el perjuicio fisiológico del material. En Colombia, la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como

la del Consejo de Estado, sostuvieron, durante mucho tiempo, que el daño extra patrimonial estaba constituido únicamente por el daño moral. Hoy ambas corporaciones aceptan la autonomía del perjuicio fisiológico o daño a la vida de la relación y su indemnización. Sin embargo, las reglas de la indemnización plena de éste se han visto menoscabadas debido a la interpretación restrictiva que sobre el punto se ha presentado. En algunas ocasiones el Consejo de Estado –por ejemplo en la sentencia de 13 de junio de 1997– ha manifestado que los perjuicios fisiológicos no tienen una entidad jurídica propia, pues se conforman a la vez de perjuicios materiales y morales. En otras ocasiones, la misma corporación ha dicho que si tienen entidad propia y diferente. En resumen, dada la confusión que subsiste en torno a definir qué es el perjuicio fisiológico o daño a la vida de la relación y 6. Henao, Juan Carlos. Obra citada, págs. 255 y 256. 7. Tamayo Jaramillo, Javier. Obra citada, pág. 166. 8. Tamayo Jaramillo, Javier. Obra citada, págs. 167 y 168. 9. Martínez Ravé, Gilberto. Obra citada, pág. 238. 116 Criterio jurídico garantista Año 2 - No. 2 - Enero-Junio de 2010 la confusión que se aprecia al tratar de precisar si este es independiente y autónomo o, por el contrario, está contenido en los materiales o en los morales o en ambos, es importante comenzar a aclarar definitivamente la verdadera naturaleza jurídica del citado perjuicio fisiológico o daño a la vida de la relación, a fin de poder conseguir confeccionar un método o mecanismo para hacer efectivo su resarcimiento de manera singular y justa. Este perjuicio se define hoy en día como la disminución de los placeres de la vida, causada por la dificultad o imposibilidad de ejercitar ciertas actividades que son placenteras para el individuo y, en general, la afectación a las relaciones de la persona con los seres que la rodean y con las cosas del mundo. Sea decir que se trata, entonces, de la privación de goces o satisfacciones que la víctima podía esperar de no haber ocurrido la lesión que ha sufrido o de la reducción en la capacidad plena de relacionarse con otros o con las cosas del mundo. Se trata, desde luego, de una alteración en las condiciones de existencia del perjudicado, ya que, aparte de los perjuicios materiales y morales que ha padecido la víctima, “en adelante no podrá realizar otras actividades vitales, que, aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia”¹⁰. Se puede entender, en fin, que el perjuicio

fisiológico o a la vida de la relación “es un daño a la vida exterior” del individuo afectado. Así, por ejemplo, quien pierde sus ojos perderá también la posibilidad de contemplar la belleza del paisaje, no podrá disfrutar del placer de la lectura o se le impedirá de todo espectáculo recreativo visual. Igualmente a quien se le despoja de los órganos genitales se le afectará una de las funciones más placenteras cual es la del sexo. La jurisprudencia, especialmente el Consejo de Estado, ha contribuido a definir la noción, perfilando algunas veces incluso su denominación en alcance y contenido, tal como se hizo en sentencia del año 2000: En efecto, el perjuicio aludido (se refiere a la denominación fisiológico) no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre. Debe advertirse, adicionalmente, que el perjuicio a que se viene haciendo referencia no alude, exclusivamente, a la posibilidad de gozar de los placeres de la vida, como parece desprenderse de la expresión *préjudice d'agrément* (perjuicio de agrado), utilizada por la doctrina civilista francesa. No todas las actividades que, como consecuencia del daño causado, se hacen difíciles o imposibles, tendrían que ser calificadas de placenteras. Puede tratarse de simples actividades rutinarias, que ya no pueden realizarse, o que requieren de un esfuerzo excesivo. Es por esto que, como se anota en el fallo del 25 de septiembre de 1997, algunos autores prefieren no hablar de un perjuicio de agrado, sino de desagrado. Lo anterior resulta claro si se piensa en la incomodidad que representa, para una persona parapléjica, la realización de cualquier desplazamiento, que, para una persona normal, resulta muy fácil de lograr, al punto que puede constituir, en muchos eventos, un acto reflejo o prácticamente inconsciente. Resulta, sin duda, más adecuada la expresión *daño a la vida de relación*, utilizada por la doctrina italiana, la cual acoge plenamente esta 10. Tamayo Jaramillo, Javier. *Obra citada*, pág. 166. 117 El perjuicio a la vida de relación... corporación. Se advierte, sin embargo, que, en opinión de la Sala, no se trata simplemente de la afectación sufrida por la persona en su relación con los seres que la rodean. Este perjuicio extra patrimonial puede afectar muchos otros lados de su vida, aun los de carácter individual, pero externos, y su relación, en general, con las cosas del mundo. En efecto, se trata, en realidad, de un daño extra patrimonial a

la vida exterior; aquél que afecta directamente la vida interior sería siempre un daño moral¹¹. Sea decir ahora, que el perjuicio fisiológico o daño a la vida de relación de una persona, también tiene la característica de ser un perjuicio considerado como el daño o menoscabo a derechos subjetivos extra patrimoniales del sujeto afectado, tal y como puede deducirse lógicamente de todo lo hasta aquí dicho. Diferencia entre el perjuicio fisiológico o de la vida.

Por eso dada la inasible naturaleza no patrimonial, debe buscarse "con ayuda del buen sentido y con apoyo en los hechos probados que den cuenta de las **circunstancias personales de los damnificados reclamantes** "una relativa satisfacción para estos últimos proporcionándoles de ordinario una suma de dinero que no deje incólume la agresión, por es la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Cesación Civil en sentencia del 9 de Diciembre del 2013 Ref. 88001-31-03-001-2002-00099-01 reajusto al daño a la vida de relación a la suma de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (**\$140.000.000.00**).

¹⁶ *Cas. Civ. sentencia 9 de diciembre de 2013, Ref. 88001-31-03-001-2002-00099-01*

Se impone al juez entonces la ponderación conforme los principios de la reparación integral la cuantificación del daño a la vida de relación, y el ejercicio de cierta discrecionalidad, que pueda encontrar

suficientemente razonable y fundada en las probanzas que en el proceso obren sobre la existencia del perjuicio y su intensidad; **constituyéndose para tal fin las limitaciones, que a mis procurados le causa la pérdida de su madre y abuela BLANCA NUBIA BERTANCOURT ZAMBRANO, elemento este de convencimiento. La pérdida de BLANCA NUBIA BERTANCOURT ZAMBRANO, cuales afectaran a su hija y nieta en su desenvolvimiento personal, familiar y social por**

el resto de su vida. Por lo cual se la ha solicitado al fallador que con fundamento a su sana crítica, las regla de la experiencia, los principios de la reparación integral. Se le conceda a DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT y A MELANNY BEDOYA HORTUA, la suma CIENTO CUARENTA MILLONES (\$140.000.000.00), y partiendo de dicho valor la suma proporcionada conforme al grado de afectación de cada uno de los integrantes de su Núcleo Familiar de la manera establecida en libelo petitorio.

Al respecto es menester aclarar que el artículo 1613 y 1616 del código civil, permite la procedencia de la reparación de todos los perjuicios. De otra manera los artículos 2341 y 2356 del mismo código ordenan la reparación integral de todos los daños en el terreno de la responsabilidad extracontractual, sin excluir el perjuicio moral, sin hacer distinción alguna. Y bien es sabido que cuando la Ley no distingue, no le dado al interprete distinguir.

DIANA LORENA HORTUA\$140.000.000,00

Total daño vida de Relación..... \$140.000.000.00 MCTE.

TOTAL PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES:

.....\$287.543.400,00 MCTE

En consecuencia, la estimación razonada de la cuantía es en suma superior a los **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE \$287.543.400,00**, la cual deberá actualizarse – indexarse hasta la fecha del pago efectivo, de conformidad con lo previsto en el art. 187 de la Ley 1437 de 2011, mediante los mecanismos, formulas y procedimientos adoptados por el Consejo de Estado, esto por los hechos narrados que atentaron contra la humanidad de **BLANCA NUBIA BERTANCOURT ZAMBRANO**, por las heridas sufridas y la muerte de la señora **BLANCA**

NUBIA BERTANCOURT ZAMBRANO, y el daño psicológico que sufrió esta familia.

JURAMENTO ESTIMATORIO

Conforme al art 206 del C.G.P., bajo la gravedad del juramento, hago la estimación de los perjuicios patrimoniales en forma razonada y cierta, en los montos solicitados para cada uno de los convocantes, igualmente, efectúo estimación de los perjuicios extra patrimoniales, aplicando los montos y criterios jurisprudencialmente acogidos y reajustados periódicamente por el Consejo de estado; discriminados de la siguiente manera:

POR EL FALLECIMIENTO DE BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO

DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT

Perjuicios extra patrimoniales		
Daño moral	Daño a la vida de relación	Total
\$73.771.700	140'000.000,00	\$213.771.700

- MELANNY BEDOYA HORTUA

Perjuicios extra patrimoniales		
Daño moral	Daño a la vida de relación	Total
\$73.771.700	-0-	\$73.771.700

PRUEBAS

Ruego sean tenidas en cuenta las siguientes:

I. Pruebas Documentales:

1. Registro Civil de defunción de BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBARABO.
2. Registros civiles de nacimiento DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT Y MELANNY BEDOYA HORTUA.
3. Copia de historia clínica de BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBARABO.
4. Copia de oficio No. 063 el juzgado penal del circuito de Sevilla (Valle).
5. Copia de Constancia de la fiscalía.
6. Oficio juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad.
7. Registro de los sucesos en prensa.
8. Constancia laboral de BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBARABO.
9. Oficio INPEC. Donde niegan casa por cárcel.
10. Historia clínica de Jhon Wilmer Vallejo Salazar-Hospital psiquiátrico
11. Informe Pericial Psicología.
12. Constancia Conciliación procuraduría

II. PRUEBA PERICIAL:

• **VALORACIÓN PSIQUIATRICA O PSICOLOGICA:** Teniendo en cuenta que la base fundamental de esta conciliación es el reconocimiento de perjuicios morales y los del daño a la vida de relación, consideramos de extrema importancia que la parte convocante sea apoyada por el Estado, a través del Instituto Nacional de Medicina Legal, para que a través de sus expertos, o peritos en la materia, se determine cuáles habrían sido los daños psiquiátricos y/o psicológicos que le fueran causados a: **DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT Y MELLANNY BEDOYA HORTUA**, por muerte de la señora **BLANCA NUBIA BERTANCOURT ZAMBRANO**, pues a pesar del paso del tiempo, con toda seguridad el perito puede vislumbrar el daño ocasionado que en algunas circunstancias es permanente.

• Para el desarrollo de esta prueba pericial, se hace necesario el apoyo del Instituto de Medicina Legal del Valle del Cauca, en el lugar más cercano a la residencia de los convocantes, que lo es municipio de Tuluá - Valle.

De no decretarse esta prueba, solicito tener en cuenta los fundamentos de derecho, por el solo hecho que vivieron sus familiares, **DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT Y MELANNY BEDOYA HORTUA**, por la pérdida de BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO. Razón por la cual ruego tener en cuenta el Dictamen pericial, Para este efecto aportado con esta demanda, rendido por la Psicóloga YOLANDA ACOSTA

III. Pruebas Testimoniales:

- LEYDI JOHANNA AYALA MARIN con C.C. 38.793.553, Dirección: Calle 27 #34-32, Celular: 314 482 90 06, quien depondrá sobre las circunstancias de modo tiempo y lugar relacionados con la ocurrencia de los hechos que originaron el daño propinado contra la vida de BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO (Q.E.P.D.) y sobre la ayuda económica que representaba la señora BETANCOURT ZAMBRANO, para su hija y nieta como la afectación moral sufrida por ellas por la muerte de BLANCA NUBIA BETANCOURT
- DIANA CAROLINA CASTRILLON con C.C. 1.116.234.940, Dirección: Calle 11 #25-41 B/La Graciela, Celular: 3177321415, quien depondrá sobre la magnitud del impacto de la muerte de la señora BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO (Q.E.P.D.), en la vida de mis procuradas, y sobre el entorno familiar de estas con la señora BLANCA NUBIA BETANCOURT.
- JAIME ANDRES VALENCIA VARON con C.C. 14.795.903 de Tuluá (V), Dirección: Transversal 12 #5-21 B/ 7 de Agosto Tuluá (V), Celular: 318 383 40 94, quien depondrá sobre la magnitud del impacto de la muerte de la señora BLANCA NUBIA BETANCOURT ZAMBRANO (Q.E.P.D.), en la vida de mis procuradas, y sobre el entorno familiar de estas con la señora BLANCA NUBIA BETANCOURT.

ANEXOS

1. Poder legalmente conferido, con los cuales se acredita la personería de la suscrita con expresas facultades para conciliar.
2. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
3. CD con archivo en PDF del escrito de conciliación.

OPORTUNIDAD DE LA PRESENTE DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA

El artículo 164 # 2 literal i del CPACA, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En el presente asunto, los hechos ocurrieron el 13 de Octubre de 2015, es decir, dentro del término que contempla el ordenamiento legal.

OPORTUNIDAD DE LA PRESENTE DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA

El artículo 164 # 2 literal i del CPACA, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En el presente asunto, los hechos ocurrieron el 13 de Octubre de 2015, es decir, dentro del término que contempla el ordenamiento legal.

JURAMENTO

Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que no he iniciado proceso alguno sobre estos hechos, ni en relación con las mismas partes.

NOTIFICACIONES

Los demandados:

✓ **LA NACION - RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA** Calle 12 No. 7-56 Bogotá D.C.
Teléfono: 565 85 00, email: info@cendoj.ramajudicial.gov.co

✓ **LA NACION COLOMBIANA- EL INSTITUTO NACIONAL, CARCELARIO "INPEC"**, en la Calle 26 No. 27-48 Bogotá D.C. teléfono 234 74 74 – 234 62 62 email: notificaciones@inpec.gov.co

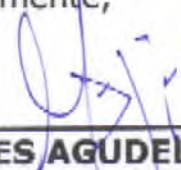
✓ **LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA**, en la Carrera 59N° 26-21, CAN, Bogotá D.C. Teléfono: 018000910600, email: lineadirecta@policianacional.gov.co

Los convocantes:

✓ **DIANA LORENA HORTUA BETANCOURT Y MELANNY BEDOYA HORTUA**, en la Carrera 58 No. 77-44 Itagüí (Ant.), Teléfono: 317 421 43 70.

✓ **El suscrito:** en la Carrera 23 No. 24-43 Oficina 107 de Tuluá (V), Teléfono: 224 69 39 – 310 505 12 79, E-mail: myabogados@hotmail.com

Atentamente,



MOISES AGUDELO AYALA
C.C No. 16.361.528 de Tuluá (V).
T.P. No. 68.337 del C.S.J.